

7. Sistema Educativo

Introducción

Las demandas de la población en materia educativa en el presente período, no difieren substancialmente de las de años anteriores, si bien no se repitió el contexto de grave conflicto con el gremio docente que en el año 2002 impidió el normal inicio del ciclo lectivo.

Las problemáticas edilicias aún siguen ocupando el primer lugar entre las quejas de las comunidades educativas y la atención de las mismas no siempre es oportuna ni completa. El distinto tratamiento presupuestario de las necesidades edilicias en los establecimientos escolares, así como los diferentes responsables de ejecutarlas, hace que difieran los tiempos que requiere el tratamiento de cada demanda, pero también conlleva el desgaste de los ciudadanos que muchas veces no saben dónde canalizarlas o no reciben suficientes respuestas. De todo ello se derivan las medidas de suspensión de clases tomadas en el presente ciclo.

En cuanto a la convivencia en el ámbito escolar, se ha observado la necesidad de implementar definitivamente la mediación escolar habida cuenta de los casos de conflictos que se suscitan entre docentes y alumnos o sus padres, y los que involucran a los niños y jóvenes entre sí. Ello sin dejar de considerar, otras situaciones que por su gravedad deben ser abordadas con medidas disciplinarias más severas o con la misma intervención de la justicia.

Una cuestión recurrente y que no ha sido debidamente atendida por parte del Ministerio de Educación y Cultura, es la atinente a los mecanismos de contratación del personal de servicios generales, a pesar de las recomendaciones de la Defensora del Pueblo en procura de que se transparente el sistema aplicado para dichos nombramientos.

También nos ocupamos del fuerte reclamo del sector docente contra el Decreto 839/03, que otorgaba una mayor puntuación a los egresados de los Institutos de Formación Docente provinciales.

Huelga decir que no se agotan aquí los temas que involucran al Sistema Educativo, habiéndose seleccionado para este capítulo los más relevantes.

Deficiencias edilicias

Dijimos ya que las distintas comunidades educativas siguen denunciando la necesidad de reparación de los edificios escolares, cuando no la construcción de nuevos que reemplacen los actuales, pues el nivel de precariedad de las instalaciones hacen imposible el dictado de clases.

Las Delegaciones Regionales atienden solamente las tareas de mantenimiento (rotura de vidrios, reparación de calefacción, etc.) y las obras de mayor envergadura encuentran

demoras no sólo en la búsqueda de financiamiento, sino en el trámite mismo de la elaboración de proyectos, afectación presupuestaria, llamados a licitación, etc.

San Carlos de Bariloche y El Bolsón- y sus áreas de influencia- son las zonas de nuestra provincia que mayor cantidad de quejas han presentado.

Desde la cartera de educación se brindaron detallados informes sobre las obras terminadas, aquellas que se encuentran en ejecución, las contratadas, las que están en elaboración de proyectos y finalmente las que fueron relevadas. En todos los casos se menciona el monto de la obra y la fuente de financiamiento: recursos provinciales (rentas generales, Fondo Social), PRODYMES, Plan Nacional de Infraestructura y Plan 700 Escuelas.

Respecto a la construcción de nuevos edificios escolares mediante el programa impulsado con financiamiento del Ministerio de Cultura de la Nación, denominado **Plan 700 Escuelas**, el área de Infraestructura escolar informó que se incorporaron los siguientes:

- Escuela Hogar N° 231 de Pje. Pichi Leufu
- Jardín de Infantes N° 3 de San Carlos de Bariloche
- Jardín de Infantes N° 81 de San Carlos de Bariloche
- Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón
- Escuela Primaria a Crear de Chichinales
- Escuela Primaria N° 358 de Chimpay
- Centro de Educación Media a Crear de Gral. Roca
- Jardín de Infantes N° 45 de Villa Regina
- Jardín de Infantes a Crear de Viedma
- Escuela Especial N° 22 de Viedma
- Escuela primaria a Crear de San Antonio Oeste
- Centro de educación Media N° 109 de Cipolletti
- Jardín de Infantes N° 1 de Cipolletti

Se agregó que se encuentran en la etapa previa de la elaboración de la documentación necesaria para lograr la elegibilidad de las mismas, a cargo de la Comisión de evaluación de la Unidad Coordinadora Nacional. Cumplido esto, comenzaría la Etapa II: licitación, adjudicación y ejecución. Esto indica que la implementación del plan tomará aún mucho tiempo.

En párrafo aparte queremos destacar que la auspiciosa creación del Fondo Social Educativo, no abarcó la expectativa de todos los sectores involucrados, ya que sabido es que en el seno de la Comisión de Seguimiento y Control del Fondo Social, existen divergencias sobre el destino de lo recaudado. Ante el choque de intereses en juego, los padres se han retirado de las reuniones y nos han llegado inquietudes en el sentido de proponer la modificación de la ley a fin de que se establezca taxativamente los porcentajes a afectar para cada destino (salarios, reparación escuelas, etc) de modo de zanjar las discusiones en dicha Comisión.

Entendemos que no se ha alcanzado a dar todas las respuestas a los reclamos de mejoramiento edilicio, dado que muchas de las problemáticas- en su mayoría reparaciones menores- encuentran injustificadas demoras burocráticas. Los intentos de gerenciamiento de este tipo de obras a través de los Municipios o de Casa Rionegrina S.E., no fueron del todo satisfactorios, y en los pocos casos que fueron exitosos, no se renovó el acuerdo, mientras que la falta de pago a contratistas y proveedores también contribuyó con la dilación apuntada.

Suspensión de clases

En distintas Escuelas Primarias y Centros de Nivel Medio se interrumpió el dictado de clases ante situaciones que impedían la permanencia de alumnos y docentes. Así, en la localidad de Sierra Grande seis establecimientos suspendieron sus clases entre 13 y 25 días, por *deficiencias en las instalaciones de gas* detectadas a partir de la intoxicación con monóxido de carbono de dos alumnos.

En Bariloche padres y directivos de la Escuela N° 71 presentaron un amparo ante el *peligro de contaminación por inhalación de polvo de asbesto*, en cuyo trámite, si bien no se detectó el producto en suspensión, se dispuso la reparación de las paredes de este viejo edificio construido con paneles del material tóxico de referencia. Además, la *falta de calefacción* motivó la paralización de la actividad escolar en varios establecimientos de esa localidad (Escuelas N° 315 y 295, CEM N° 51), y en otros fue por problemas de *anegamientos por filtraciones en las cubiertas* (Escuelas N° 187 y 284). Mientras que la *presencia de roedores* en el Jardín de Infantes N° 21 de El Bolsón fue la razón de la interrupción de las clases. En el resto de la Provincia padres y docentes autoconvocados dispusieron también la suspensión de clases en situaciones estimadas de peligro, habiéndose convertido esta modalidad de excepción en algo habitual, lo que indica el quiebre de la comunicación entre las autoridades y las comunidades educativas.

La Defensoría del Pueblo ha señalado al Ministerio de Educación y Cultura la imprevisión manifestada en las citadas problemáticas, pues se desaprovecha el receso escolar para hacer las verificaciones del funcionamiento y estado de los equipos - los que inevitablemente se rompen cada temporada invernal - u otras tareas de mantenimiento. Asimismo, consultamos en cada caso las acciones puestas en marcha para recuperar los objetivos curriculares no dictados en los períodos sin clases, obteniéndose resultados satisfactorios gracias al esfuerzo de los docentes y alumnos involucrados.

Residencias Escolares y Escuelas Hogares

La Defensoría del Pueblo realiza periódicas visitas a las Escuelas Hogares y Residencias Escolares ubicadas en la Línea Sur de la provincia, de manera tal que en forma alternada se mantiene contacto con la mayoría de ellas.

Los establecimientos educativos visitados en el presente año fueron: Escuela Hogar N° 151 de Aguada de Guerra, Residencia Escolar Primaria N° 320 de Sierra Colorada, Residencia Escolar Primaria de Ramos Mexía, Residencia Escolar Primaria de Valcheta, Escuela Hogar N° 76 de Chipauquil, Residencia Escolar Primaria de Aguada Cecilio, Residencia

Escuela Primaria de Sierra Pailemán, Escuela Hogar N° 171 de Cona Niyeu y Residencia Escolar Primaria de Arroyo los Berros.

Esto nos permitió dialogar con los docentes, recorrer los edificios escolares y compartir con los chicos allí internados un momento del día.

Observamos un incremento de niños que están internados en distintas Escuelas Hogares debido a razones de índole familiar : a cuestiones económicas, abandono, violencia, etc. Por ejemplo, en la Residencia Escolar Primaria de Aguada Cecilio de una matrícula de 36 niños, sólo 6 son provenientes de las zonas rurales. Los restantes son de San Antonio Oeste y fueron internados por emergencias sociales de sus familias y con autorización del E.T.A.P.

Esta modalidad proteccional, propias de las áreas de Minoridad y Familia , está prevista en el Reglamento de Escuelas Hogares. Así en el art. 1º inc. a) el mencionado Reglamento establece: “no podrán inscribirse alumnos cuyos núcleos familiares residan en la localidad donde existan servicios educacionales del nivel”, como causal de excepción agrega “excepto aquellos alumnos cuya situación socioeconómica y familiar lo justifica”.

La falta de trabajo de los padres y la pobreza, no debieran ser motivo para que los niños crezcan lejos de sus familias y de sus hogares.

La mayoría de los establecimientos ha logrado equipamiento en televisores, videos, reproductores de música, libros, etc. a través del Fondo Social Educativo, vigente hasta hace dos años aproximadamente. Es importante destacar el apoyo que brinda también la Asociación de Padrinos de Escuelas Rurales en la de provisión de útiles escolares, zapatillas, etc.

Observamos que se pone especial atención en que los chicos mantengan un contacto frecuente con sus familiares y con sus casas. En algunos es semanal y en otros mensual, según posibilidades de los padres distantes.

Los niños y jóvenes allí ubicados, tienen cobertura en aspectos básicos para su desarrollo, tales como: alimentación, asistencia médica y odontológica, apoyo escolar, enseñanza de hábitos, etc.

Esto hace que en un porcentaje altísimo los alumnos culminen la enseñanza primaria y muchos , incluso, prosiguen con sus estudios en el nivel medio con igual resultado.

Conflictos escolares. Mediación

En el marco de la crisis social, se manifiestan en graves conflictos dentro de las escuelas, donde se registran casos de violencia entre los alumnos o entre éstos y los docentes. Los padres por un lado denuncian la ausencia de diálogo con las autoridades escolares. Por su parte, los docentes se quejan porque no se crean nuevos cargos ya que deben contener problemáticas sociales, a la par que cumplen con su tarea específica de enseñar y formar a los niños y jóvenes.

Efectivamente, se han agudizado cuestiones tales como la desnutrición, deserción escolar, desocupación, etc., y si bien estas temáticas sociales deben ser abordadas desde otros ámbitos gubernamentales, no escapa a nuestra comprensión el difícil rol que les cabe a los docentes. Muchos son los reclamos que recibimos por situaciones de violencia entre jóvenes, cuyos padres, a su vez, vienen descontentos por el tratamiento que docentes y directores han dado a esos hechos. Es decir, al conflicto inicial entre alumnos, se suma el de los padres con los docentes. Nuestra experiencia indica que las crisis de las familias repercuten en las relaciones de los padres con la Escuela, y así estallan situaciones de conflicto que en otro contexto no se manifestarían.

La Defensora del Pueblo ha dicho claramente en sus pronunciamientos que no es su función dirimir disputas como si se tratara de dar razón a unos en detrimento de otros y ha sugerido entonces una instancia de mediación para que las partes encuentren la superación de sus desacuerdos. Es por ello que remitimos al Centro de Mediación Comunitaria dependiente del Ministerio de Gobierno algunos casos, mientras que recomendamos a las autoridades educativas las puesta en marcha de la mediación escolar.

Claro está que no todas las situaciones pueden ser resueltas con la herramienta de la mediación, y así, en aquellos casos de graves denuncias por abusos contra menores, se solicitó al Ministerio de Educación que tomara las medidas disciplinarias y legales pertinentes (denuncia penal, sumario, separación del cargo).

Becas nivel terciario y universitario

Durante el presente periodo, tal como en años anteriores, se repiten los pedidos de estudiantes rionegrinos con dificultades para sostener los estudios terciarios y universitarios. Entre las motivaciones aparece: la propia incapacidad económica de la familia, y las limitaciones de conseguir empleo para los jóvenes.

Respecto a las becas que se deben otorgar cada año según lo dispone la Ley N° 2.950, en el Informe Anual 2002 esta Defensoría del Pueblo informó a la Legislatura Provincial sobre el incumplimiento en el que incurrió el Consejo de Becas Provincial durante el año 2002, al no abrir las inscripciones y no informar causas u otra disposición al respecto, toda vez que *“... el beneficio tendrá validez por un año y se iniciará el trámite cada año con las condiciones que determine el Consejo Provincial de Becas”*(Instructivo Administrativo Contable para las becas 2001).-

Así el mencionado Consejo no sólo no explicó a la ciudadanía la razón por la cual no se reunió durante el 2002 a fijar estas fechas, los montos y las condiciones para acceder al beneficio que se prevé en el marco del Fondo de Becas creado por ley N° 2.950 en el año 1996, sino que tampoco respondió a la Recomendación que realizara al respecto esta Defensoría del Pueblo a través de la Resolución N° 1.184/02.

Durante el 2003, el Consejo de Becas nuevamente omite la apertura del período de inscripción al beneficio de las becas. Sólo fija las condiciones para la renovación de las becas otorgadas durante el 2001, y se observa una reducción sustancial en los estudiante

que cumplieron los requisitos para continuar con el beneficio. De 1.235 beneficiarios del 2001, sólo 344 alumnos pudieron renovar su beca en el 2003.

No se evaluó que las condiciones exigidas para la renovación de las becas otorgadas (rendir como mínimo dos materias durante el 2002) fueron de difícil cumplimiento, dado que muchos estudiantes becados por la provincia debieron suspender sus estudios, precisamente por haberse interrumpido el pago de esta ayuda social ya acordada.

Concluimos que las interrupciones en las ayudas económicas acordadas a los estudiantes, atenta contra la finalidad que dio sustento y fundamento al recurso plasmado en la Ley 2950, cuales es *“ viabilizar la capacitación y actualización permanente de los rionegrinos y garantizar el derecho a la educación, atento a nuestros principios constitucionales y de la obligación que le compete al Estado en su rol de mediador en la distribución de los recursos ante inequidades de origen social o económico ”*.

Respecto a las becas de Nivel Medio, se encuentra vigente el Programa Nacional de Becas de Nivel Medio. El mismo se aplica directamente a través de los establecimientos educativos seleccionados por criterios de Nación. En general la ciudadanía reclama por la falta de información clara y precisa y se cuestionan los otorgamientos. Estos cuestionamientos han sido aclarados con respuestas satisfactorias.

Contratación en servicios generales

Las tareas de servicios generales en establecimientos educativos de la Provincia, son cubiertas por distintos tipos de relaciones laborales. Por un lado por personal no docente de planta permanente, por otra parte por empleados de SAERSA y en otros casos por contratados temporarios. En este último caso, los reclamos se repiten incansablemente, pues no se establece el mecanismo de selección y los aspirantes frustrados en sus pretensiones, cuestionan las decisiones administrativas.

Frente a la ausencia de normas regulatorias, queda en manos de la autoridad administrativa seleccionar discrecionalmente el personal con destino a tareas de servicios generales conforme lo dispuesto por la Resolución N° 782/96 del CPE. Por ello, mediante la Resolución N° 953/01 se formuló la SUGERENCIA al Ministerio de Educación y Cultura para que evalúe la posibilidad de optimizar el mecanismo de selección del personal de servicios generales temporario.

La propia Ministro de Educación y Cultura respondió dicha Sugerencia, manifestando que se tomaría en cuenta al fin propuesto, sin embargo, transcurridos más de dos años la situación no se modificó y por Resolución N° 505/03 insistimos en nuestra postura. Allí dijimos: *“... la discrecionalidad de los actos administrativos puede conducir a equívocos en la interpretación de decisiones de la administración pública y en un tema como el que nos ocupa, con una gran carga de expectativas en los aspirantes a ocupar cargos en Servicios Generales dado el grave índice de desocupación, se impone dar mayor transparencia a las designaciones y enmarcarlas en pautas objetivas que despejen cualquier cuestionamiento de abuso en la mentada discrecionalidad.”*

La **Recomendación de la Defensora del Pueblo** entonces, fue que se dictara una reglamentación para la contratación del personal de Servicios Generales que establezca pautas objetivas de selección, y desde el Ministerio de Educación se contestó indicándose que se propiciaría la inclusión del tema en la agenda del Comité Institucional de Recursos Humanos y Organización creado por Resolución N° 1.337/03 (conforme Ley 3052).

Decreto 839/02

Este Decreto que otorgó tres puntos adicionales a los docentes egresados de Institutos de Formación Docente de Río Negro, fue fuertemente cuestionado por docentes, representantes gremiales y por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Comahue. La Defensoría del Pueblo fijó su postura en la **Resolución N° 876/03**¹ del 25 de junio del 2003, en la que RECOMENDÓ al Poder Ejecutivo la derogación de la norma en tanto resultaba inconstitucional porque violentaba los derechos a enseñar y a aprender consagrados en el artículo 14 de la Constitución Nacional, los que sólo admiten reglamentaciones limitativas por razón de la falta de idoneidad, previsión contemplada en el art.16 de nuestra Carta Magna, que reconoce la igualdad ante la ley y la admisibilidad en los empleos sin otra condición que la idoneidad.

El Poder Ejecutivo dictó el 14 de julio el Decreto 794/03 que dispuso la suspensión de la aplicación de la norma cuestionada, lo que motivó que la Defensora del Pueblo insistiera en la derogación del Decreto, sin perjuicio del pedido de informes cursado al Superior Tribunal de Justicia que entiende en la acción impetrada por la UNTER, quien deberá resolver en definitiva sobre el planteo de inconstitucionalidad del Gremio, así como sobre la declaración de abstracta que pretende la Fiscalía de Estado.

Otros temas

La Defensoría del Pueblo recepta habitualmente reclamos vinculados a: situación escalafonaria, demora en la liquidación del Incentivo Docente y otros adicionales, clasificación de títulos, ampliación de la oferta educativa y/o de la matrícula, retención indebida de certificados de estudios por establecimientos de educación privada, equipamiento para escuelas técnicas, pago a proveedores, etc.. Muchos de ellos encuentran solución en tiempos prudenciales, otros están aún bajo investigación y todos aquellos que se resuelven mediante el pago de sumas de dinero, son los que mayores demoras presentan (proveedores, retroactivos, etc).

¹ Ver Resolución N° 876/03 en el Apéndice

Apéndice

RESOLUCIÓN N° 876/03 DPRN

Viedma, 25 de junio de 2003

VISTO: El Expediente N° 2.224/02, caratulado “**DOCENTES DE INGENIERO JACOBACCI s/ manifiestan disconformidad con el Decreto N° 839/02**”, y su acumulado N° 3.091/03 caratulado “**UNTER- Seccional Viedma s/ solicita intervención por aplicación Decreto N° 839**”

CONSIDERANDO:

I

Que las presentes actuaciones son promovidas por un grupo de docentes de Ingeniero Jacobacci, oriundos de distintas provincias y que integran el sistema educativo de Río Negro, quienes manifiestan su disconformidad con el Decreto N° 839/02, por el que se otorga un puntaje adicional de tres (3) puntos a todos aquellos docentes egresados de los Institutos de Formación Docente Continua de Río Negro. Consideran discriminatoria la previsión legal y solicitan se deje sin efecto.

Que en ocasión de resolver la avocación de la Defensora del Pueblo al presente reclamo, advertimos a los interesados acerca de las vías judiciales disponibles para evitar los efectos contrarios a sus derechos que resultaran de la aplicación de la norma que cuestionaban.

Sin perjuicio de ello, dimos intervención al Ministerio de Educación y Cultura quien responde, a través de la Dirección de Nivel Superior, ratificando la vigencia de la norma en tanto no sea derogada o se dicte sentencia judicial que impida su aplicación conforme lo expresado por la Defensoría del Pueblo en la Resolución N° 58/03 que dispuso el traslado a ese Ministerio.

Que recientemente, se presentaron ante esta Defensoría del Pueblo el Secretario General de la Seccional Viedma de la UNTER, formulando idéntico reclamo y haciendo saber que se han presentado en forma individual y general (por la conducción gremial) amparos contra la aplicación del Decreto 839/02, en tanto la valoración adicional de 3 puntos que prevé dicha normativa para aquellos egresados de los institutos provinciales, supone en la escala de calificaciones el desempeño de seis (6) años en el Nivel Primario y hasta doce (12) en el Nivel Medio.

II

Que el artículo 145 del Estatuto Docente – Ley 391- dispone: “ *Los egresados de los establecimientos educacionales de la Provincia de Río Negro, gozarán de un puntaje*

especial que no podrá exceder al correspondiente a un año de antigüedad, como asimismo los nativos de esta provincia egresados en establecimientos de otras y los docentes en actividad con más de seis años de antigüedad en establecimientos provinciales.”

Que la Resolución N° 1.233/92 del Consejo Provincial de Educación asigna a los docentes comprendidos en el artículo 145 del Estatuto Docente, “una bonificación especial y única de 0,25 puntos”.

Que el Decreto N° 839/02 modifica parcialmente el artículo 145° citado , y establece:

“Artículo 1º: Otorgar a los docentes egresados de los Institutos de Formación Docente Continua de la Provincia de Río Negro, un puntaje especial equivalente a TRES (3) puntos para la valoración en la clasificación de los aspirantes a ingreso y ascenso del personal titular e interinos en los niveles inicial, primario y medio, según corresponda al nivel del título obtenido”.

Que en el Considerando, se hace referencia a que “ la formación docente de la Provincia de Río Negro ha construido una trayectoria académica con innovaciones curriculares importantes y actualizadas” y ello es invocado como fundamento del puntaje adicional para los egresados de los Institutos de Formación Docente Continua de nuestra provincia.

Que no ponemos en duda la calidad de dichos Institutos, sin embargo, ello no es suficiente para sospechar de inferior mérito académico a otros centros de estudios que formaron a los docentes que hoy ocupan cargos - o que aspiran a ingresar- en nuestro sistema educativo.

Que el territorio de esta joven Provincia ha sido poblado también por ciudadanos procedentes de otras regiones del país que contribuyen con su trabajo, sus conocimientos y su vocación, al progreso de la sociedad y de la economía de Río Negro.

Que distintas políticas del Estado se dirigieron a fomentar la inmigración hacia nuestro vasto territorio. Basta recorrer la Provincia, para escuchar tonadas de distintas regiones argentinas. Entre todos esos argentinos, nuestros docentes, muchos de ellos residiendo y trabajando en pequeñísimas y alejadas localidades o parajes de la Línea Sur o de la zona andina.

También hubo padres que con gran esfuerzo sostuvieron los estudios de sus hijos fuera de nuestra Provincia cuando la elección de su vocación no les permitía formarse en sus lugares de residencia.

Al mismo tiempo, la tan auspiciada integración regional se funda también en la realidad de que muchos de nuestros jóvenes cursan estudios terciarios y superiores en provincias vecinas, así como recibimos alumnos provenientes de éstas.

Valoramos toda política destinada a incrementar la oferta educativa en nuestra provincia, y los Institutos de Formación Docente Continua son un ejemplo más de tal iniciativa. Ello no obstante, privilegiar los egresados de éstos en detrimento de otros se observa, en primera instancia, discriminatorio.

III

La Ley Federal de Educación en su artículo 18 establece: “La etapa Profesional de Grado no Universitario se cumplirá en los Institutos de Formación Docente o equivalentes y en Institutos de Formación Técnica que otorgaran Títulos Profesionales y estarán articulados horizontal y verticalmente con la Universidad.”

La **Resolución N° 32/93** de la XVI Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educación aprobó el **Documento ALTERNATIVAS PARA LA FORMACION, EL PERFECCIONAMIENTO Y LA CAPACITACION DOCENTE – Serie A N° 3-** .

Allí se expresa: “ **Organización de la oferta de formación docente:** *El sistema de formación continua deberá estar dotado de una estructura flexible que permita optar por distintos trayectos curriculares y componer distintos circuitos a partir de intereses profesionales y de demandas regionales: dentro de un mismo instituto o entre distintos institutos formadores u otros centros académicos; o bien complementar con la capacitación docente los saberes adquiridos fuera del sistema formal y debidamente acreditados. Esta flexibilidad deberá estar presente en las instancias de formación de grado, perfeccionamiento y reconversión.*”

La **Resolución 36/94** del C.F.C.y E. aprueba el **Documento para la Concertación – Serie A N° 9-** por el que se crea la **"Red Federal de Formación Docente Continua"**, la que se define como un sistema articulado de instituciones que asegure la circulación de la información para concretar las políticas nacionales de formación docente continua, acordadas en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación. **Su finalidad es la de ofrecer un marco organizativo que facilite las articulaciones intra e interprovinciales para el desarrollo de un Plan Federal de Formación Docente Continua** (el resaltado nos pertenece).

La Red Federal de Formación Docente Continua está conformada por aquellas instituciones de gestión pública o privada cuya responsabilidad primaria sea la formación docente de grado, como así también aquellas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales provinciales, nacionales e internacionales cuya actividad y/o producción constituyan un significativo aporte para la formación docente continua

También se establece que todas las instituciones acreditadas en la Red Federal de Formación Docente Continua serán periódicamente evaluadas por las cabeceras provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a través de los mecanismos y/u organismos de evaluación de la calidad de la educación de las provincias y

por el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación con los procedimientos que se consideren necesarios.

Que el . 53 de la Ley 24.195 – Ley Federal de Educación- establece los deberes del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. En su inciso g) señala: "Promover y organizar concertadamente en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación, una red de formación, perfeccionamiento y actualización del personal docente y no docente del sistema educativo nacional

Que en función de ello, la **Resolución N° 52/96** del C.F.C.y E., aprueba el **Documento Serie A N° 11 BASES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE**. Algunas de las previsiones de esa normativa que queremos destacar, indican que:

- Con el fin de garantizar la calidad de la formación docente, todas las instituciones de formación docente deberán cumplimentar los criterios establecidos en el Acuerdo A-9 (Res. CFCyE 36/94).
- De acuerdo con la aplicación del art. 5 de la Ley 24.521 – Ley de Educación Superior- , los tipos de instituciones de formación docente pueden ser:
 1. Institutos Superiores de Formación Docente : Instituciones de nivel superior no universitario de formación de docente.
 2. Colegios Universitarios : Instituciones de nivel superior no universitario que formen docentes que hayan acordado mecanismos de acreditación con instituciones universitarias.
 3. Institutos Universitarios
 4. Universidades
- *Las instancias de la formación docente continua son:*
 1. La formación de grado.
 2. El perfeccionamiento docente en actividad.
 3. La capacitación de graduados docentes para nuevos roles profesionales.
 4. La capacitación pedagógica de graduados no docentes.

Que por otra parte, la **Resolución N° 63/97** de la XXXI Asamblea del C.F.C. y E., aprueba el **Documento A-14 "Transformación Gradual y Progresiva de la Formación Docente Continua"** con los aportes sugeridos en las reuniones regionales de ese Consejo.

Así, en el Capítulo 3. Reordenamiento de la oferta de formación docente, apartados 3.2. Sistema de acreditación de las instituciones no universitarias de formación docente, 3.2.3 Criterios y parámetros, se indica:

“El Documento A-9 (Res. CFCyE 36/94) establece los criterios que todas las Instituciones de Formación Docente Continua deberán cumplimentar para acreditar en la RFFDC; el Documento A-11 (Res. CFCyE 52/96) precisa los criterios correspondientes a las instituciones que formen docentes para el tercer ciclo de la Educación General Básica y para la Educación Polimodal.

*Es necesario establecer procedimientos transparentes que garanticen la pertinencia y la calidad de la Formación Docente Continua. Para ello, **se adoptarán parámetros comunes frente a los cuales las ofertas de cualquier institución puedan evaluarse y mejorarse, atendiendo las necesidades del período de transición.***

Los parámetros comunes mínimos serán aplicados hasta el año 2002 por las cabeceras de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de establecer la primera acreditación de Instituciones de Formación Docente Continua en la RFFDC (ANEXO I).”

IV

Que la reseña normativa precedentemente expuesta, deja claro que el espíritu de la concertación alcanzada en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación, del que forma parte Río Negro junto con las demás provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es otro que el de adoptar criterios uniformes en el marco de la Red Federal de Formación Docente Continua, y que también se reconocen a los distintos centros de estudios (Institutos Superiores, Institutos Universitarios, Universidades, etc) que integran la Red, la misma calidad educativa, en función del Plan Federal de Formación Continua.

Que a mayor abundamiento, la propia Ley Federal de Educación reconoce el derecho y establece la obligación de los docentes a formarse y capacitarse en forma continua, y los documentos emanados del C.F.C. y E. enfatizan en la complejidad del proceso de reconversión del personal docente en servicio, asumiéndose como necesario generar los tiempos, los espacios y los recursos para tal fin, así como encarar estrategias de estímulo, apoyo e incentivo para la reconversión docente, indispensable en este proceso de transformación (conf.Doc.A-3 CFCyE).

Que siendo así, la norma del Decreto 839/02 genera injustas diferencias entre los docentes egresados o capacitados en otros centros de formación docente reconocidos por el plan federal y también con respecto a aquellos en servicio que han venido cumpliendo con los objetivos de la reconversión, mediante su capacitación posterior y continua.

V

Que por lo expuesto, no dudamos en calificar de inconstitucional la norma del Decreto 839/02 en tanto violenta los derechos a enseñar y a aprender consagrados en el artículo 14 de la Constitución Nacional, los que sólo admiten reglamentaciones limitativas por razón de la falta de idoneidad, previsión contemplada en el art.16 de nuestra Carta

Magna, que reconoce la igualdad ante la ley y la admisibilidad en los empleos sin otra condición que la idoneidad.

Que la desproporcionada ventaja que otorga el puntaje que establece ese Decreto para un grupo de docentes, supone para otros el desempeño de muchos años de docencia para acumular tal calificación.

Que el Decreto cuestionado, además, modifica unilateralmente el propio Estatuto Docente apartándose del marco de concertación de la paritaria docente, ámbito necesario de discusión en la materia.

Que la norma ha recibido el rechazo por irrazonabilidad, de otros sectores involucrados en la formación educativa, tal el caso de las distintas unidades académicas de la Universidad Nacional del Comahue, alta casa de estudios de nuestra región, con sedes incluso en Río Negro, de donde egresan también profesores con aspiración a integrar nuestro sistema educativo (ver Dirario Río Negro, pag. 8, 20 de junio del 2003).

Que a la fecha se encuentra próximo el vencimiento del plazo para las inscripciones en la Junta de Clasificación de Nivel Inicial, Primario y Medio para ingreso, acumulación y acrecentamiento de cargos para el ciclo lectivo 2004.

Que un gran número de docentes en toda la Provincia ha promovido acciones individuales en la justicia, pendientes aún de resolución, contra el Decreto 839/02.

Que ello no obstante, por todos los fundamentos expuestos precedentemente, en uso de las facultades que confiere la ley 2.756 al Defensor del Pueblo, se RECOMIENDA al Poder Ejecutivo Provincial derogue el Decreto 839/02, a fin de evitar la masiva promoción de acciones judiciales en su contra, en tanto el mismo violenta los artículos 14 y 16 de la Constitución Nacional, y discrimina entre docentes egresados de distintos centros de estudios.

Por ello:

**LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA
PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESUELVE**

PRIMERO: RECOMENDAR al Poder Ejecutivo Provincial derogue el Decreto 839/02, a fin de evitar la masiva promoción de acciones judiciales en su contra, en tanto el mismo violenta los artículos 14 y 16 de la Constitución Nacional, y discrimina entre docentes egresados de distintos centros de estudios (ART. 27 Ley 2.756)

SEGUNDO: Poner en conocimiento de la Sra. Ministro de Educación y Cultura, la presente Resolución

TERCERO: Poner en conocimiento del Sr. Presidente de la Legislatura Provincial y de cada uno de los Presidentes de los Bloques que la integran la presente Resolución.

CUARTO: Regístrese, Notifíquese y Archívese.

